MIGUEL BORRA

Presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Sostiene que la mejor forma de reconocer el esfuerzo de los trabajadores públicos durante la pandemia es que «recuperen el poder adquisitivo perdido» en los últimos años. Por ello, ya ha trasladado al Gobierno la necesidad de acordar un plan de legislatura y le pide, además, que elimine la tasa de reposición.

«Exigimos una subida para los funcionarios del 3,6% en 2022»

JAVIER BARBANCHO

DANIEL VIAÑA MADRID

Miguel Borra (Zaragoza, 1968) es el máximo responsable del sindicato CSIF, y desde esa posición denuncia los reducidos sueldos que perciben muchos empleados públicos, los pocos médicos y camas hospitalarias que comparativamente tiene España o la escasez de recursos del SEPE. Y sobre la propuesta de Podemos para eliminar Muface, adelanta que parte de una premisa «equivocada» y que responde a motivos «ideológicos».

Pregunta.– El Gobierno no contempla compensar la pérdida de poder adquisitivo que este año sufrirán los funcionarios y para el año que viene perfila una mejora del 2%. ¿Lo considera suficiente?

Respuesta.– En la reunión que tuvimos hace unos 10 días con la nueva secretaria de estado de Función Pública [Lidia Sánchez Milán], le adelantamos que es necesario un acuerdo a dos años, que es lo que queda de legislatura, que reconozca el esfuerzo de los empleados públicos a lo largo de la pandemia. Y una primera manera de hacerlo es recuperando algo del poder adquisitivo que hemos perdido en los últimos años. Desde que Zapatero nos recortó los salarios en 2010, hemos perdido un 10% de poder. Queremos un acuerdo que garantice que no vamos a perder poder y que vamos a poder recuperar algo. Es decir: la inflación más un punto y medio.

P.– ¿Y eso en qué cifra concreta se traduce?

R.– Si cogemos los datos que daba esta semana Nadia Calviño, que hablaba de una previsión de inflación de 2,1% para 2021, y le sumamos un punto y medio, sería un 3,6%. Y para el año siguiente, la previsión de inflación que se tenga más un 1,5%.

P.– ¿Lo que exigen es una subida ya en 2022 del 3,6% que compense la inflación y permita una ganancia de un punto y medio?

R.– Eso es.

P.– ¿No cree que a un trabajador del sector privado, que ha estado en ERTE o que incluso ha perdido su trabajo, le puede parecer injusto o al menos chocante que se pida una subida tan notable y que, además, se incluya a sectores que apenas han tenido actividad en la pandemia?

R.– Los salarios que se están cobrando en estos momentos en las administraciones públicas son salarios que, en muchísimos casos, apenas superan los 1.000 euros. Y desde luego, si queremos tener médicos, que no hay, o enfermeros, que no hay, o un largo etcétera de profesiones, tenemos que conseguir salarios dignos. Y, legalmente, no se puede discriminar en las retribuciones básicas entre comunidades autónomas ni dentro de los mismos grupos.

P.– Siempre apuntan que en la anterior crisis sufrieron una pérdida de poder, pero con Montoro también registraron una ganancia de poder adquisitivo notable. De hecho, en 2019 la inflación fue negativa y la subida salarial fue de hasta más del 2,5%.

R.– Sí, y ese 10% de pérdida que apuntamos es contando con esta ganancia. De todas maneras, estamos hablando de que si tuviéramos esa subida del 10%, estaríamos en el salario de 2010.

P.– También están preocupados por la tasa de reposición.

R.– La tasa de reposición es un muro porque lo único que permite es que se saquen a oferta las plazas de las personas que se jubilan o que fallecen. Es necesario un auténtico plan de recursos humanos: identificar qué necesitamos, cuándo y dónde. España tiene 1.000 médicos menos por cada millón de habitantes que Alemania, y menos camas hospitalarias que la media de la UE. Otro ejemplo: el SEPE perdió en 10 años unos 3.400 puestos que no se pudieron cubrir porque había tasa de reposición del 0% o del 10%. Y ahora resulta que, como no tiene una plantilla estructural, perdió 500 trabajadores en junio, va a perder 500 trabajadores más en septiembre y volverá a perder otros 500 en diciembre. 1.500 servidores públicos menos para atender toda la avalancha de prestaciones que seguimos teniendo.

> «El sueldo de muchos empleados públicos apenas supera los 1.000 euros»

P.– ¿Qué opina de la proposición no de ley [PNL] de Podemos para eliminar Muface?

R.– No es una posición nueva la de Podemos, y entendemos que parte de premisas equivocadas por las que se quiere trasladar que se trata de un privilegio de algunos empleados públicos. Y no lo es. Además, tal y como está el sistema nacional de salud, dudamos mucho de que fuera capaz de absorber al millón de personas que están adscritas más otro millón que hay de beneficiarios. Movimientos como esta PNL generan intranquilidad y se le está intentando dar un contenido ideológico.